



**ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
EN SALUD – ADRES**

RESOLUCIÓN NÚMERO 121516 DE 2025

(24 de octubre 2025)

"Por medio de la cual se resuelve parcialmente revocatoria directa contra la Resolución No. 190104 del 26 de noviembre de 2024 y Resolución No. 102541 del 12 de septiembre de 2024"

**LA DIRECTORA DE OTRAS PRESTACIONES (E) DE LA ADMINISTRADORA DE LOS
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES**

En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos, 114 del Decreto Ley 019 de 2012 modificado por el Decreto Ley 2106 de 2019, en desarrollo el parágrafo del artículo 2.6.1.4.3.14 del Decreto 780 de 2016, numeral 1º y 5º del artículo 17 del Decreto 1429 de 2016 y el numeral 2º del artículo 6º de la Resolución 1012 de 2022 y,

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

- 1.1 Que el Director de Otras Prestaciones de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud- ADRES, mediante **Resolución No. 190104 del 26 de noviembre de 2024 y Resolución No. 102541 del 12 de septiembre de 2024**, impuso la obligación de pagar una suma líquida de dinero a la señora **ANA PETRONA ESPINOZA DIAZ** identificada con cédula de ciudadanía No. **50868443**, en calidad de propietario y al señor **RONALDO JAVIER BLANCO BENITEZ** identificado con cédula de ciudadanía No **1102878529**, en calidad de conductor, un valor de **TREINTA Y TRES MILLONES VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$33.020.542,26)** y **TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS M/CTE (\$31.751.913,06)**, indicando que esta suma debe ser indexada durante el periodo comprendido entre la fecha de pago de la reclamación y la fecha de expedición de dicho acto administrativo, más los intereses que se causen a partir de su firmeza y hasta la fecha de pago, con ocasión a la reclamación generada por el accidente de tránsito ocurrido el día **07/11/2021** en el cual se vio involucrado el vehículo de placa **EBE48D**, de propiedad del obligado, automotor que para la fecha de los hechos, no contaba con una póliza de seguro obligatorio SOAT.
- 1.2 Que la **Resolución No. 190104 del 26 de noviembre de 2024**, se notificó por publicación por aviso el día 1 de agosto del 2025, de conformidad con lo previsto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
- 1.3 Que la **Resolución No. 102541 del 12 de septiembre de 2024**, se notificó por publicación por aviso el día 16 de mayo del 2025, de conformidad con lo previsto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Posteriormente y refiriéndonos a la notificación de los actos administrativos, respecto a este punto, es importante precisar que los Actos Administrativos han sido definidos por la doctrina como *"las manifestaciones de voluntad de la administración tendientes a modificar el ordenamiento jurídico, es decir, a producir efectos jurídicos"* y que para que este pueda nacer a la vida jurídica debe reunir los requisitos consagrados en la Ley. De igual forma, la doctrina ha sostenido que existen ciertos elementos esenciales en todo acto administrativo que predeterminan la validez y la eficacia misma del acto; es decir, la competencia de la autoridad administrativa, la voluntad en la expedición, el contenido, la motivación, la finalidad y la forma.

Ahora bien, con relación a los efectos del acto administrativo se tiene que por regla general surte efectos a partir de su expedición, siempre que no contenga alguna determinación que lo dilate, posponga o suspenda, como su publicación, notificación, requerir de la aprobación de un superior o estar sujeto a una condición para que produzca sus efectos.

"Por medio de la cual se resuelve parcialmente revocatoria contra la Resolución No. 190104 del 26 de noviembre de 2024 y Resolución No. 102541 del 12 de septiembre de 2024"

Respecto a la notificación de los actos administrativos de carácter particular, se tiene que deberá cumplirse con las reglas establecidas de conformidad con los artículos 66, 67, 68 y 68 de la Ley 1437 de 2011; la cual señala:

"(...) ARTÍCULO 66. Deber de notificación de los actos administrativos de carácter particular y concreto. Los actos administrativos de carácter particular deberán ser notificados en los términos establecidos en las disposiciones siguientes.

ARTÍCULO 67. Notificación personal. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse.

ARTÍCULO 68. Citaciones para notificación personal. Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, se le enviará una citación a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, para que comparezca a la diligencia de notificación personal. El envío de la citación se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto, y de dicha diligencia se dejará constancia en el expediente.

ARTÍCULO 69. Notificación por aviso. Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo.

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. (...)"

Acorde a las razones expuestas en los párrafos anteriores, se deja de presente que, el actuar de la ADRES se encuentra ceñido a lo ordenado por las normas propias del proceso de determinación del deudor adelantado en contra de la señora **ANA PETRONA ESPINOZA DIAZ**, pues en prevalencia del principio de publicidad y en salvaguarda del debido proceso y demás derechos que le asisten al obligado, se adelantó la notificación por publicación del aviso en la página web de la Entidad, pues al presentarse una devolución en la dirección suministrada por parte de la IPS para ser notificado de manera física, aquella goza por mandato de la ley de la facultad para dar a conocer el acto administrativo por el mecanismo empleado en el caso en concreto.

Por lo anterior, la actuación administrativa desplegada por la ADRES, se ha surtido de acuerdo con las disposiciones normativas establecidas en la Ley 1437 del 2011, obrando de manera diligente y respetando los derechos al debido proceso, defensa y contradicción que le asisten al Obligado.

1.4 Que el señor **CESAR ARMANDO LEAL LOZANO** identificado con cédula de ciudadanía No **1067950421**, en representación de la señora **ANA PETRONA ESPINOZA DIAZ** identificada con cédula de ciudadanía No. **50868443**, radico solicitud de declaración de la caducidad de la **Resolución No. 190104 del 26 de noviembre de 2024 y Resolución No. 102541 del 12 de septiembre de 2024**, con radicado 20256305642782 del 10 de octubre de 2025, argumentando entre otras cosas; la falta del plazo legal para expedir la resolución que impone la obligación de pago.

1.5 Que con fundamento en los documentos que obran en el expediente, esta Dirección procederá a resolver esta solicitud de revocatoria directa en contra de la **Resolución No. 190104 del 26 de noviembre de 2024 y Resolución No. 102541 del 12 de septiembre de 2024**.

2. PROCEDENCIA DE LA REVOCATORIA

Que ésta revocatoria se dispone de conformidad con lo preceptuado por el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en cuanto expresa que: "Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

"Por medio de la cual se resuelve parcialmente revocatoria contra la Resolución No. 190104 del 26 de noviembre de 2024 y Resolución No. 102541 del 12 de septiembre de 2024"

- 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
- 2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
- 3. **"Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona"**.

La revocatoria es la prerrogativa que tiene la administración para enmendar, en forma directa o a petición de parte, sus actuaciones contrarias a la ley o a la Constitución, que atenten contra el interés público o social o que generen agravio injustificado a alguna persona. Así mismo, en tanto que la administración puede extinguir sus propios actos por las causales previstas en la ley y está facultada para hacerlo en cualquier momento; adicionalmente es una obligación que forzosamente debe asumir en los eventos en que, de oficio, constate la ocurrencia de una de las causales señaladas. Si así fuere, la administración tiene el deber de revocar el acto lesivo de la constitucionalidad o legalidad o atentatorio del interés público o social o que causa agravio injustificado a una persona.

Sobre el particular, la Corte Constitucional mediante sentencia C-742 de 1999, M.P. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, precisa sobre la revocatoria directa lo siguiente:

"(...) La revocación directa tiene como propósito el de dar a la autoridad la oportunidad de corregir lo actuado por ella misma, inclusive de oficio, ya no con fundamento en consideraciones relativas al interés particular del recurrente sino por una causa de interés general que consiste en la recuperación del imperio de la legalidad o en la reparación de un daño público. La persona afectada sí puede en principio pedir a la Administración que revoque su acto, o la autoridad puede obrar de oficio. Cosa distinta es que el interesado, a pesar de haber hecho uso de los recursos existentes, pretenda acudir a la vía de la revocación directa, a manera de recurso adicional, lo cual puede prohibir el legislador, como lo hace la norma acusada, por razones de celeridad y eficacia de la actividad administrativa (art. 209 C.P.) y además para que, si ya fue agotada la vía gubernativa, el administrado acuda a la jurisdicción.

... La revocación directa es la prerrogativa que tiene la administración para enmendar, en forma directa o a petición de parte, sus actuaciones contrarias a la ley o a la Constitución, que atenten contra el interés público o social o que generen agravio injustificado a alguna persona. Y es una prerrogativa en tanto que la administración puede extinguir sus propios actos por las causales previstas en la ley y está facultada para hacerlo en cualquier momento, incluso cuando el acto administrativo ya ha sido demandado ante lo contencioso administrativo; pero, también es una obligación que forzosamente debe asumir en los eventos en que, motu proprio, constatare la ocurrencia de una de las causales señaladas. Si así fuere, la administración tiene el deber de revocar el acto lesivo de la constitucionalidad o legalidad o atentatorio del interés público o social o que causa agravio injustificado a una persona. (...)"

En el mismo sentido el Honorable Consejo de Estado en Sentencia con radicación número 25000-23-000-1998-3963-01 (5618-02), Consejero Ponente Alberto Arango Mantilla, consideró lo siguiente en cuanto a la revocatoria de los actos administrativos:

*"Como se sabe, la revocación directa del acto administrativo es una potestad legal otorgada a una autoridad para hacer desaparecer de la vida jurídica las decisiones que ella misma ha expedido, **bien sea por razones de legalidad** o por motivos de mérito (causales). **Son razones de legalidad cuando constituye un juicio estrictamente lógico jurídico, esto es, cuando se hace una confrontación normativa, porque infringe el orden preestablecido que constituye el principio de legalidad (num. 1º del art. 69 del C.C.A.).** Y de mérito, cuando el acto es extinguido por razones de oportunidad, conveniencia pública, o cuando una persona determinada recibe un agravio injustificado (num. 2º y 3º ibidem)". (Subrayado y negrilla fuera de texto).*

Así mismo, la **sentencia 2013-00577 de 2020 proferida por el Honorable Consejo de Estado** dispuso lo siguiente:

"De la revocatoria directa de los actos administrativos de carácter particular y concreto

En relación con los actos administrativos conviene recordar que se constituyen en la expresión unilateral de la voluntad de la Administración, dirigida a crear, modificar o

RESOLUCIÓN NÚMERO 121516 DE 2025**HOJA No. 4 de 8**

"Por medio de la cual se resuelve parcialmente revocatoria contra la Resolución No. 190104 del 26 de noviembre de 2024 y Resolución No. 102541 del 12 de septiembre de 2024"

extinguir situaciones jurídicas generales de carácter abstracto e impersonal y de carácter particular y concreto respecto de una o varias personas determinadas o determinables.

Tanto los actos administrativos generales y abstractos como los particulares y concretos, pueden ser sustraídos del mundo jurídico por cuenta de las mismas autoridades administrativas que los proferieron, bien sea de oficio o a solicitud de parte, cuando como expresamente lo ordena el Artículo 69 del CCA: sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o la ley; no estén conformes con el interés público o social o atenten contra él; o si con ellos se causa agravio injustificado a una persona.

Específicamente en cuanto a los actos de contenido particular y concreto, se debe precisar que la Administración puede revocarlos, bien sea de manera directa o demandando su propio acto a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad, siempre y cuando se configuren las causales anteriormente descritas de que trata el Artículo [69](#)".

En relación con el debido proceso, la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-980 de 2010, ha señalado que el mismo no solo aplica al procedimiento judicial sino también a todas las actuaciones administrativas, y con ello a todo el actuar de la administración pública:

"... la Constitución extiende la garantía del debido proceso no solo a los juicios y procedimientos judiciales, sino también a todas las actuaciones administrativas. Ello significa, que el debido proceso se mueve también "dentro del contexto de garantizar la correcta producción de los actos administrativos, y por ello extiende su cobertura a todo el ejercicio que debe desarrollar la administración pública, en la realización de sus objetivos y fines estatales, es decir, cubija a todas sus manifestaciones en cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las peticiones que realicen los particulares, a los procesos que por motivo y con ocasión de sus funciones cada entidad administrativa debe desarrollar y desde luego, garantiza la defensa ciudadana al señalarle los medios de impugnación previstos respecto de las providencias administrativas, cuando crea el particular, que a través de ellas se hayan afectado sus intereses". (Negrilla y subrayado fuera de texto).

El Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Cuarta de 25 de octubre de 2017 se pronunció sobre las modalidades de revocatoria directa en la Sentencia 73001-23-31-000-2008-00237-01 señalando lo siguiente:

"(...) No obstante, del examen de la normativa positiva que la regula (artículos 69 a 74 del Código Contencioso Administrativo) se puede concluir que tiene dos modalidades: de un lado, como mecanismo de utilización directa por parte del sujeto pasivo del acto frente a la autoridad que lo produjo o ante su inmediato superior y, de otro, como medida unilateral de la Administración para dejar sin efecto decisiones adoptadas por ella misma. En el segundo caso, es un mecanismo ya no alternativo sino adicional al de la vía gubernativa, del que puede hacer uso la Administración de manera oficiosa, bajo ciertas circunstancias y limitaciones, para revisar y corregir la manifiesta antijuridicidad, inconveniencia, o el agravio injustificado que cause alguno de sus actos administrativos. Es, en efecto, un mecanismo unilateral de la administración otorgado por el legislador, con el fin de revisar sus propias actuaciones y, dentro del contexto de la actuación oficiosa, sacar del tránsito jurídico decisiones por ella misma adoptadas". Mediante esta figura, la Administración, de oficio o a solicitud de parte, deja sin efecto los actos administrativos expedidos por ella misma, por las causales y conforme con el trámite consagrado en la ley. (Negrilla y subrayado fuera de texto).

3. CONSIDERACIONES DE ESTA DIRECCIÓN

Tal como se manifestó en la **Resolución No. 190104 del 26 de noviembre de 2024 y Resolución No. 102541 del 12 de septiembre de 2024**, la obligación que ordena el cobro, tiene fundamento en el artículo 106 del Decreto Ley 2106 de 2019, el cual facultó a esta Entidad para ordenar mediante acto administrativo, el cobro de los créditos a favor del Estado correspondientes a las reclamaciones reconocidas y pagadas con ocasión de los daños corporales y/o indemnización por muerte y gastos funerarios, causados en Accidentes de Tránsito, como

"Por medio de la cual se resuelve parcialmente revocatoria contra la Resolución No. 190104 del 26 de noviembre de 2024 y Resolución No. 102541 del 12 de septiembre de 2024"

consecuencia del incumplimiento de la obligación de contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito -SOAT vigente.

Que según lo establecido en el artículo 192 del Decreto 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero) y en concordancia con el artículo 42 de la Ley 769 de 2002, todo vehículo que transite en el territorio colombiano debe estar amparado por un seguro obligatorio de accidentes de tránsito- SOAT.

De acuerdo con lo anterior, y de conformidad con las normas que regulan el proceso de cobro que nos ocupa, se tiene que quien figure ante el Estado como propietario de un vehículo, es la persona responsable de cumplir con las obligaciones que se deriven de tal derecho, por consiguiente, el propietario inscrito de un automotor carente de SOAT que resulte involucrado en un accidente de tránsito, le corresponde asumir la responsabilidad frente a los gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, que reciban los afectados en calidad de beneficiarios o víctima de tales siniestros, los cuales en su debido tiempo fueron asumidos por el Estado a través de la ADRES, siendo por lo tanto procedente el proceso de repetición.

Por lo anterior, con el fin de hacer exigibles obligaciones, entre las que se encuentran las derivadas de las reclamaciones presentadas con ocasión a daño a terceros en accidente de tránsito que debieron ser asumidos por el Estado a través de la ADRES, mediante Resolución 037 del 19 de enero de 2018 estableció el Reglamento Interno de Cartera de la ADRES, allí se indica que luego del reconocimiento de una acreencia a favor de la Entidad que no conste en un título preexistente, se deberá constituir un título ejecutivo (resolución que ordena el cobro), el cual será ejecutado posteriormente a través del proceso de cobro coactivo reglamentado por el Estatuto Tributario, el cual inicia a partir de que se libra el respectivo mandamiento de pago.

Ahora bien, es menester tener en cuenta lo establecido por el artículo 98 de la Ley 1437 de 2011, el cual indica que las entidades públicas deberán recaudar las obligaciones creadas en su favor, que consten en documentos que presten mérito ejecutivo de conformidad con la mentada Ley. Para tal efecto, están revestidas de la prerrogativa de cobro coactivo o podrán acudir ante los jueces competentes.

En virtud de lo expuesto, la Ley 1066 de 2006 señaló que las entidades públicas cuyas actividades o funciones impliquen el recaudo de caudales públicos tienen jurisdicción coactiva y deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor; por lo tanto es deber de las entidades públicas, establecer mediante acto administrativo de carácter general, el reglamento interno para el recaudo de cartera, en el cual se establezcan reglas claras para la celebración de acuerdos de pago de las obligaciones existentes a favor de la entidad.

Es así, que en aras de ejercer la acción de repetición por parte de la ADRES, el artículo 106 inciso 4 del Decreto 2106 de 2019 señaló:

"La ADRES deberá expedir, dentro de los dos (2) años siguientes al pago de la indemnización o al pago de la EPS del servicio en salud y transporte, un acto administrativo que ordenará el cobro al propietario y/o conductor del vehículo no asegurado por el SOAT y podrá hacerlo efectivo a través de la jurisdicción coactiva, adelantando el procedimiento administrativo de cobro coactivo. Contra este acto administrativo únicamente procederá el recurso de reposición."

Conforme lo anterior, una vez la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES ha pagado los servicios de salud, indemnizaciones y gastos a las víctimas de accidentes de tránsito, deberá expedir un acto administrativo que ordene el respectivo reembolso por parte del propietario o conductor del vehículo que inobservó el deber de adquirir el SOAT.

Será el mencionado acto administrativo que ordena el reembolso a favor de la ADRES, en el cual consta una obligación clara, expresa y exigible (artículo 99, núm.1, CPACA) el título ejecutivo que habilitará el cobro coactivo contra el propietario del vehículo o su conductor. En ese contexto, se debe entender que la caducidad es la sanción que consagra la ley por el no ejercicio oportuno del derecho de acción, en tanto al exceder los plazos preclusivos para ello. Es decir, las normas de caducidad tienen fundamento en la seguridad jurídica que debe imperar en todo ordenamiento, en el sentido de impedir que situaciones permanezcan en el tiempo, sin que sean definidas tanto en vía administrativa como judicial. Por regla general, el momento en que inicia la contabilización de dicho término es el de la ocurrencia del hecho dañoso, pues se presume que ahí se tiene conocimiento del daño.

"Por medio de la cual se resuelve parcialmente revocatoria contra la Resolución No. 190104 del 26 de noviembre de 2024 y Resolución No. 102541 del 12 de septiembre de 2024"

En atención a lo dicho, se entiende que el plazo de caducidad de la acción de repetición será de dos (2) años conforme a lo previsto en el artículo 164-2 (i) del CPACA y lo dispuesto en el artículo 106 inciso 4 del Decreto 2106 de 2019. Término que empezará a correr desde el momento en que nace el derecho de recobro en cabeza de la ADRES, lo cual ocurre cuando se efectúa el **último giro** de las reclamaciones reconocidas y pagadas por concepto de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos que correspondan con ocasión del hecho dañoso. Esto último en aplicación de la misma regla contenida en la parte final del artículo 164-2 (i) del CPACA y porque el afectado no puede quedar indefinidamente expuesto a procedimientos judiciales o administrativos por parte del Estado.

Reclamación No 1806337:

Expuesto lo anterior, para el caso sub examine se evidencia que la **Resolución No. 190104 del 26 de noviembre de 2024 y Resolución No. 102541 del 12 de septiembre de 2024**, mediante la cual se impone el pago de la reclamación No **1806337**, en contra de la señora **ANA PETRONA ESPINOZA DIAZ**, fue expedida dentro del plazo de los dos (2) años con los que contaba la administración para hacerlo efectivo a través de la jurisdicción coactiva. Por lo tanto, se entiende que la ADRES estaba en término para expedir el acto administrativo, dado que la fecha del último giro de las reclamaciones reconocidas y pagadas por la entidad, con ocasión al accidente de tránsito en el que se vio involucrado el vehículo automotor de placa **EBE48D**, fue el día **31/03/2023**, y la expedición del título ejecutivo ocurrió el **26 de noviembre de 2024, 12 de septiembre de 2024**. De esta manera, la administración estaba facultada para iniciar la actuación administrativa en contra de la señora **ESPINOZA DIAZ**, frente a esta reclamación, así como se detalla a continuación:

Numero	Reclamación	Fecha de giro	Fecha de accidente	Valor unitario indexado
1571069		2022-08-08	2021-11-07	\$147.926,89
1571139		2022-08-08	2021-11-07	\$6.302.443,43
1578709		2022-08-08	2021-11-07	\$25.229.091,72
1806337		2023-03-31	2021-11-07	\$72.451,02
			Total	\$31.751.913,06

En consecuencia, queda esclarecido que, si bien el accidente de tránsito ocurrió el día **07/11/2021**, durante los años siguientes se ha efectuado el trámite propio por parte de la entidad reclamante para el reconocimiento y pago de la reclamación y posterior a ello, el día **31/03/2023**, se efectuó el último giro de la obligación presentada por aquella como se indicó anteriormente, dando como resultado que la Entidad estando dentro del término legal ordenado en el artículo 106 del Decreto 2061 de 2019 iniciara el respectivo cobro en contra del recurrente es decir el título ejecutivo que nos convoca y que data del año 2024, por lo que se revocará parcialmente lo contenido en la Resolución No. 190104 del 26 de noviembre de 2024 y Resolución No. 102541 del 12 de septiembre de 2024.

Reclamaciones No 1540272 – 1571069 – 1571139 - 1578709:

En relación con la **Resolución No. 190104 del 26 de noviembre de 2024 y Resolución No. 102541 del 12 de septiembre de 2024**, mediante la cual se impone el pago de la obligación a la señora **ANA PETRONA ESPINOZA DIAZ**, se observa que únicamente respecto de las reclamaciones No. **1540272 – 1571069 – 1571139 - 1578709**, el acto administrativo fue expedido con posterioridad al término de dos (2) años con los que contaba la administración para hacerlo efectivo a través de la jurisdicción coactiva. En consecuencia, se entiende que la oportunidad para expedir el acto administrativo por parte de la ADRES, en relación con las reclamaciones en mención, había fenecido, toda vez que la fecha del último giro de las reclamaciones reconocidas y pagadas por la Entidad, con ocasión del accidente de tránsito en el que se vio involucrado el vehículo de placa **EBE48D**, corresponde a las fecha **2022-08-08 - 2022-08-23**, mientras que la expedición del título ejecutivo ocurrió el **26 de noviembre de 2024 y 12 de septiembre de 2024**; situación que evidencia, de manera clara, la configuración del fenómeno jurídico de la caducidad de la acción de repetición, como se detalla a continuación:

"Por medio de la cual se resuelve parcialmente revocatoria contra la Resolución No. 190104 del 26 de noviembre de 2024 y Resolución No. 102541 del 12 de septiembre de 2024"

Numero	Reclamación	Fecha de giro	Fecha de accidente	Valor unitario indexado
1540272		2022-08-23	2021-11-07	\$1.233.268,26
1571069		2022-08-08	2021-11-07	\$148.091,63
1571139		2022-08-08	2021-11-07	\$6.309.462,23
1578709		2022-08-08	2021-11-07	\$25.257.188,43

Finamente, con el ánimo de resolver la situación administrativa y de conformidad con los argumentos y análisis jurídicos expuestos, esta Dirección declarará la **caducidad** de la acción de repetición respecto de las obligaciones contenida en las reclamaciones No. **1540272 – 1571069 – 1571139 – 1578709** y, como consecuencia de ello, ordenará la revocatoria parcial de lo dispuesto en la **Resolución No. 190104 del 26 de noviembre de 2024 y Resolución No. 102541 del 12 de septiembre de 2024.**

En virtud de lo anteriormente expuesto, este Despacho:

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Revocar parcialmente la **Resolución No. 190104 del 26 de noviembre de 2024 y Resolución No. 102541 del 12 de septiembre de 2024**, en el sentido de declarar la caducidad de la acción de repetición respecto de las obligaciones contenidas en las reclamaciones No. **1540272 – 1571069 – 1571139 – 1578709**, por haber operado el término legal para su exigibilidad a través de la jurisdicción coactiva, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.

ARTÍCULO SEGUNDO: **DECRETAR** la **TERMINACIÓN** y **ARCHIVO** de la actuación administrativa adelantada en contra de la señora **ANA PETRONA ESPINOZA DIAZ** identificada con cédula de ciudadanía No. **50868443**, en calidad de propietario y al señor **RONALDO JAVIER BLANCO BENITEZ** identificado con cédula de ciudadanía No **1102878529**, en calidad de conductor, respecto a la obligación contenida dentro de las reclamaciones **1540272 – 1571069 – 1571139 – 1578709** de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: **Notificar** a la señora **ANA PETRONA ESPINOZA DIAZ** identificada con cédula de ciudadanía No. **50868443**, en calidad de propietario y al señor **RONALDO JAVIER BLANCO BENITEZ** identificado con cédula de ciudadanía No **1102878529**, en calidad de conductor, y al señor **CESAR ARMANDO LEAL LOZANO** identificado con cédula de ciudadanía No **1067950421**, el contenido de la presente resolución, conforme lo establecen los artículos 67 y 68 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Destinatario	Dirección	Ciudad
ANA PETRONA ESPINOZA DIAZ	CRA 8 N 7 45/ call_96@hotmail.com	Sincelejo-Sucre
RONALDO JAVIER BLANCO BENITEZ	CRA 8 N 7 45 RONALDOBLANCOBENITEZ@GMAIL.COM	Sincelejo-Sucre
CESAR ARMANDO LEAL LOZANO	Calle 31 N° 12-25 oficina 102 / call_96@hotmail.com	Montería-Córdoba

ARTÍCULO CUARTO: **Comunicar** la presente decisión a la Dirección de Gestión de los Recursos Financieros de Salud y a la Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la ADRES, para que adelanten las actuaciones que correspondan en el marco de sus competencias.

ARTÍCULO QUINTO: **Comunicar** la presente decisión a la Oficina Asesora Jurídica, para que adelanten las actuaciones que correspondan en el marco de sus competencias.



RESOLUCIÓN NÚMERO 121516 DE 2025

HOJA No. 8 de 8

"Por medio de la cual se resuelve parcialmente revocatoria contra la Resolución No. 190104 del 26 de noviembre de 2024 y Resolución No. 102541 del 12 de septiembre de 2024"

ARTÍCULO SEXTO: Indicar que contra la presente resolución no procede recurso alguno.

Dada en Bogotá D.C., a los (24) días del mes de octubre 2025.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



Firmado Digitalmente por
Yasmín Escamilla B.
Directora (E) de Otras Prestaciones

YASMÍN ESCAMILLA B.

Directora (E) de Otras Prestaciones
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
(SGSSS) – ADRES

Revisó: Rafael Enrique Roa Pinzón - Abogado Contratista *RP*
Elaboró: Claudia Ávila - Abogada Contratista. *CA*
Expediente: 20231200140302176E